

Un diagnóstico alternativo sobre la salud macroeconómica

Enrique Velazco Reckling, Ph.D.

Fundación INASET – Plataforma Empleo Digno

La excelente salud macroeconómica boliviana que los organismos multilaterales no cesan de destacar, es el resultado, se argumenta, de políticas orientadas a preservar los equilibrios macro a la vez que se aplica un nuevo modelo de desarrollo en el que los excedentes de la explotación de los recursos naturales, son distribuidos por el Estado para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Las expectativas de bienestar que este escenario proyecta, alienta las demandas de sectores y actores sociales que, en esencia, reivindican el derecho a recibir la justa parte de los beneficios que les corresponde en esa saludable macroeconomía. La imposibilidad del Estado de satisfacer estas demandas, están derivando con creciente frecuencia en conflictos que tienden a acentuar la inestabilidad social y política, condiciones que tienen incidencia negativa en los procesos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Si esta imposibilidad de responder a las demandas sociales reflejara sólo una debilidad temporal en la estructura institucional, porque el modelo precedente de Estado no estaba diseñado para atender a las demandas de la sociedad, los conflictos tenderían a aplacarse en la medida que se desarrolla la capacidad institucional de respuesta. Por el contrario, si la incapacidad pública de respuesta está asociada a la insuficiencia de los recursos disponibles o a la insostenibilidad de los niveles de recursos en el tiempo, los conflictos tenderían a acentuarse por doble partida: por la falta de respuestas a las demandas, de una parte, y por la nueva frustración ante un modelo que resulta insuficiente para avanzar al vivir bien, por otra.

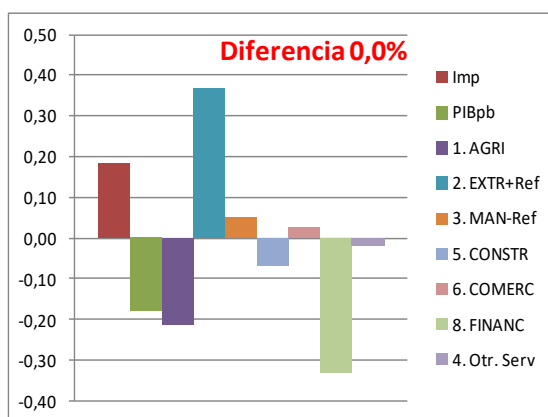
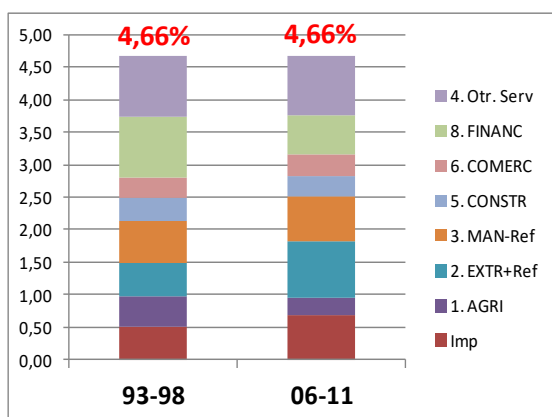
El optimista diagnóstico de los organismos multilaterales sobre la salud de la macroeconomía boliviana, que apela a todo el instrumental de diagnóstico y de evaluación que le proporciona la teoría económica, sugiere sin duda que estamos siguiendo el camino correcto de crecimiento, aunque podríamos estar ante dificultades coyunturales para atender las demandas que siempre surgen desde diferentes sectores de la sociedad.

Sin embargo, como estos mismos organismos han estado equivocados en el pasado reciente –con nuestro y con otros “pacientes”–, no está de más intentar un diagnóstico propio aplicando los métodos de la medicina (económica) tradicional: el sentido común, que dice que no puede haber una economía saludable (ni micro ni macro) si la gente no se siente bien. En consecuencia, aplicando el dicho atribuido a Albert Einstein que “si siempre haces lo mismo, siempre tendrás los mismos resultados”, podemos aproximar un diagnóstico alternativo de la salud macro y de

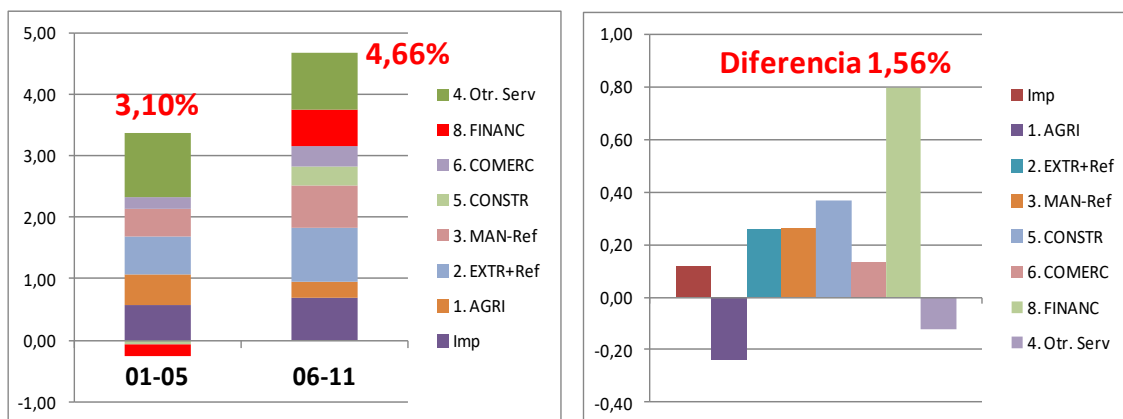
sus efectos esperados, partiendo por identificar qué diferencia el crecimiento logrado desde 2006 respecto al observado entre 1990 y 2005, para luego deducir los impactos esperados de este nuevo patrón de crecimiento sobre las variables empleo y salarios.

Con las series de datos del INE sobre la incidencia de las actividades económicas en el PIB a precios constantes (Bs. de 1990) entre 1988 y 2010, la Tabla y Figuras siguientes muestran los valores promedio calculados para el período 1990 a 2005 (en tres segmentos: 1993-1998; 2001-2005; y 1990-2005) y para el de 2006 a 2011, así como las diferencias respecto a este último.

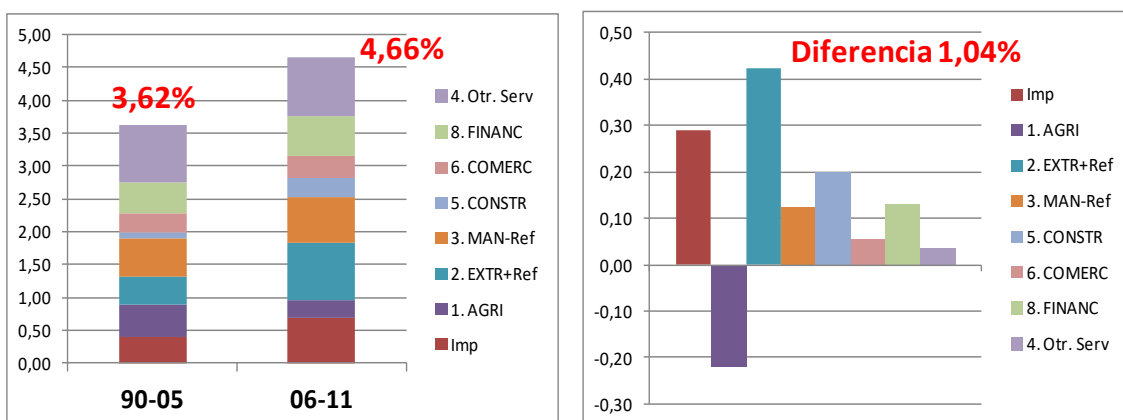
Tasa de Crecimiento (%)	3	5	5a	7	DIFERENCIAS		
	01-05	90-05	93-98	06-11	7 - 3	7 - 5	7 - 5a
PIB (precios de mercado)	3,10	3,62	4,66	4,66	1,57	1,04	0,00
Impuestos	0,57	0,40	0,50	0,68	0,12	0,29	0,18
PIB (precios básicos)	2,53	3,23	4,16	3,98	1,45	0,75	-0,18
Agricultura	0,51	0,49	0,48	0,27	-0,24	-0,22	-0,21
Extractivos (+Refinerías)	0,61	0,44	0,50	0,87	0,25	0,42	0,37
Industria Manufacturera (-Refinerías)	0,44	0,58	0,65	0,70	0,26	0,12	0,05
Construcción	-0,07	0,09	0,36	0,29	0,37	0,20	-0,07
Comercio	0,21	0,29	0,32	0,34	0,14	0,06	0,02
Servicios Financieros, Seguros, Inmob.	-0,20	0,47	0,93	0,60	0,80	0,13	-0,33
Otros Servicios	1,03	0,87	0,92	0,91	-0,12	0,04	-0,02



El crecimiento del PIBpm en el "auge neoliberal" que incluye la capitalización durante los años '90, es exactamente igual al logrado con el Proceso de Cambio. El PIBpb cae arrastrado por la caída en servicios financieros, agricultura y construcción; crecen los sectores extractivos y los impuestos.



En relación al último “quinquenio neoliberal”, la importante diferencia en el PIB promedio (1,57) se explica por el crecimiento del sector Financiero (con un 51% de la diferencia total), la construcción, el sector extractivo y el comercio. La Agricultura muestra una fuerte caída.



El “crecimiento neoliberal” de 1990 a 2005, en promedio ha sido 1% menor que entre 2006 y 2011 (3,62 frente a 4,66). La diferencia se explica con el crecimiento de los impuestos, el sector extractivo, la construcción y el sector financiero. La agricultura es el único sector que muestra una caída de casi un cuarto en su aporte relativo.

Los tres períodos comparados con el crecimiento observado entre 2006 y 2010, corresponden al “auge neoliberal” (1993-1998), al quinquenio final (2001-2005) y a un promedio representativo de la Nueva Política Económica instaurada en 1986 (1990-2005). Los valores muestran que, en los últimos seis años, el crecimiento promedio del PIB fue 1,04% mayor que durante el llamado período neoliberal (4,66% frente a 3,62%). El mayor crecimiento se puede explicar básicamente por el aumento en la incidencia de sectores extractivos (0,42), impuestos (0,29), construcción (0,20) y servicios financieros (0,13). En términos relativos respecto a 1990-2005, la incidencia de la construcción se triplica (215%), la del sector extractivo se duplica (96%), la de los impuestos (vinculados también al sector extractivo por las regalías e IDH) aumenta en tres cuartas partes mientras que los servicios financieros aumentan en casi un 30%; la incidencia del comercio y de la industria aumentan en 20%.

Por el contrario, dada la importancia que se asigna a la Agricultura y a la seguridad alimentaria en la Constitución Política del Estado y en el Plan Nacional de Desarrollo, es sorprendente que la incidencia de la agricultura cae en casi un 50%; en términos de los aportes relativos, la caída implica que el aporte de la agricultura se reduce del 13.5% al 5,8% en la estructura del PIB, es decir, cae en una tercera parte después de 2006.

En general, en período 2006-2010, el PIB a precios básicos se diferencia del de la “nueva política económica” por el marcado crecimiento de la participación del sector extractivo, la construcción y servicios financieros, y la sistemática caída de los aportes de la agricultura; el PIB precios de mercado creció sobre la base de un importante incremento en las recaudaciones tributarias.

Resumiendo, los datos sugieren que lejos de cambiar fundamentalmente el modelo extractivo-rentista, el crecimiento reciente lo ha acentuado. Así, en el año 2000 las exportaciones con valor agregado (las no tradicionales) constituían el 55% de las exportaciones totales mientras que en 2011 alcanzan apenas a un 15%; las estimaciones del INE sobre la estructura de la población ocupada muestran que al menos dos tercios del crecimiento de la población ocupada entre 2006 y 2010 se concentró en los sectores con productividad y con remuneraciones por debajo del promedio, acentuando de esta manera la precariedad del empleo.

Al respecto, el boletín OBESS del CEDLA de marzo de 2012 afirma:

...tomando la información del CEDLA para los años 2010 y 2011, el desempleo equivalente (desempleo abierto + subempleo visible y subempleo invisible) se incrementó de manera alarmante de un 64.8 a 71.9 por ciento en el eje central urbano del país, con mayor impacto en las mujeres (de 71.6 a 80.3 por ciento) en un período calificado de “bonanza económica”. Estos índices son casi similares a los que se registraron en el 2001 donde la crisis económica nacional tocó fondo.

En consecuencia, es posible inferir que el patrón de crecimiento persistente desde la segunda mitad de los años 1990, no ha sido esencialmente modificado, como tampoco las directrices que los organismos multilaterales promueven desde los tiempos del Consenso de Washington. Por ello, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, en su reporte sobre Bolivia en 2011, felicita el desempeño económico y, con gran optimismo, afirma que “se espera que la economía crecerá por la recuperación en la producción de hidrocarburos, la mayor inversión pública y precios favorables de las exportaciones”; en este marco, “la prioridad a corto plazo es frenar la inflación, en tanto que, *satisfacer las necesidades de desarrollo y lograr avances en reducir la pobreza, siguen como objetivos a mediano plazo.*” El Fondo también aplaude con particular énfasis los resultados (la alta rentabilidad) y la fortaleza del sistema financiero, y recomienda al Gobierno protegerlo y fortalecerlo para ampliar el acceso de las empresas y personas al crédito.

A su vez, las políticas públicas plantean como estrategia para enfrentar la crisis que amenaza a las economías centrales, cuatro pilares: industrializar sectores estratégicos (hidrocarburos, minería y agricultura); potenciar mercado interno apoyando pequeñas unidades productivas en la manufactura; mantener el ritmo de gasto público en bonos y transferencias; y, continuar la gradual devaluación del dólar para aplacar las presiones inflacionarias.

El reporte y las recomendaciones del Fondo reflejan el pensamiento económico ortodoxo: la meta es el crecimiento económico y no el desarrollo; el desarrollo equitativo y la reducción de la pobreza, no son dos rasgos necesarios del crecimiento; controlar la inflación es más importante que crear empleo; la re-distribución (bonos) es políticamente preferible a la mejora real de las remuneraciones y los salarios. En general, las políticas parecen guiarse por condiciones de la coyuntura antes que por los objetivos de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, el FMI no menciona que la profundización financiera, *sin atacar previamente a los factores que generan la desigualdad*, sólo contribuirá a acentuarla reduciendo, además, las posibilidades de un verdadero crecimiento productivo con horizontes a largo plazo.

Habiendo seguido este tipo de pautas durante demasiados años entre 1988 y 2005, las políticas económicas en Bolivia, en general, están totalmente en contra-ruta con las que se requieren para superar efectivamente la pobreza y la desigualdad. Partiendo de las identidades y las relaciones económico-contables más elementales, es sencillo demostrar que las políticas que incrementan la productividad y la *remuneración neta al trabajo* (sea trabajo asalariado o auto-empleado) necesariamente contribuirán al crecimiento económico con reducción de la pobreza, en tanto que, las que la deprimen, tienen el efecto contrario.

La remuneración laboral se origina en el valor que el trabajo contribuye a agregar en los procesos de producción. En general, el valor agregado es la diferencia entre el valor final, en el mercado, del bien o del servicio que se genera, menos el costo de las materias primas, insumos y servicios incorporados en el producto. Este valor adicional al de materias primas e insumos –creado por la “magia de la producción”– sirve para remunerar los aportes de los factores que intervienen en su creación: el trabajo (sueldos y salarios), el capital (utilidades, dividendos), uso de activos productivos (depreciación), bienes y servicios públicos (impuestos al Estado), y servicios de apoyo y complementarios (alquileres, transporte, etc.).

Tres factores incrementan la remuneración neta al trabajo de los trabajadores asalariados y los (auto)empleados: la distribución primaria de la renta (cómo se divide el valor agregado entre la remuneración al trabajo y la utilidad bruta en las organizaciones económicas); el aumento del valor agregado y de la productividad, en general; y la creación de puestos de trabajo para ocupar productivamente a la fuerza laboral.

En Bolivia, la distribución primaria de la renta está entre las más inequitativas: mientras en las economías con mejor calidad de crecimiento la remuneración al trabajo puede superar el 60% del valor agregado, en Bolivia está por debajo del 30%. Por otra parte, en lugar de promover el alza de los salarios y de las remuneraciones a partir del aumento sostenido del valor agregado y la productividad, se presiona los salarios a la baja para mitigar presiones inflacionarias –en el mejor de los casos, se acepta conservar su poder adquisitivo–, por un lado, o se incrementan los costos directos y de transacción, reduciendo el valor agregado y la productividad. Por último, fuera de proyectos de empleo de emergencia, Bolivia no ha encarado todavía políticas reales de creación de puestos de trabajo con incentivos a la justa remuneración y a la equitativa distribución del producto, siendo la tendencia, por el contrario, la de promover el “cuentapropismo forzado” bajo el eufemismo de “microempresas” de muy baja productividad y con alta precariedad del empleo.

En el otro lado de las identidades contables, entre los factores que reducen la remuneración al trabajo (y el consumo de los hogares), están las políticas fiscales y tributarias; el nivel de consumo y el ahorro no productivo de los dueños del capital; el nivel y naturaleza de las inversiones; la estructura de las exportaciones; y el saldo fiscal neto.

La desproporcionada participación de la utilidad bruta (excedente) en la desigual distribución primaria de la renta, alienta el consumo suntuario y deprime la remuneración al trabajo. La creciente acumulación de ahorro no productivo y el fortalecimiento de tendencias e incentivos al comercio (formal e informal) con productos importados, las inversiones (y especulaciones) en sectores como el inmobiliario (dentro y fuera del país), las importaciones de vehículos y ropa usados, etc., acentúa utilidades, por un lado, y la precariedad del empleo, por otro.

Las políticas tributarias son altamente regresivas, inequitativas y estrictamente recaudatorias, generando fuertes desincentivos a las actividades creadoras de valor y de empleo. En general, el manejo fiscal ha respondido básicamente a las políticas de los gobiernos y a las “veleidades” de estructuras administrativas que incurren en gastos públicos de acuerdo a las muchas urgencias de coyuntura, pero que no responden estrategias de desarrollo.

Como la prioridad, sigue siendo el crecimiento centrado en exportaciones de recursos naturales, la inversión (pública y privada) se concentra en sectores intensivos en capital, en infraestructura o servicios sin generar el empleo permanente ni mejorar las remuneraciones para amplios sectores de la población; por el contrario, ocasionan distorsiones (tipo de cambio, enfermedad holandesa, etc.) que afectan a la producción interna que agrega valor y al desarrollo de la capacidad productiva.

En síntesis, el diagnóstico alternativo sobre la salud de la macroeconomía, ofrece un escenario y un cuadro clínico bastante menos optimista. Sugiere un urgente tratamiento integral,

mediante el cual se corrija un sinnúmero de malos hábitos que limitan el bienestar de las personas y las perspectivas de un desarrollo inclusivo sostenido: justificamos la mala distribución primaria del ingreso porque insistimos que el capital es el factor escaso; congelamos las remuneraciones y los salarios por austeridad y para controlar la inflación; celebramos el cuenta-propismo forzado (empleo precario autogenerado por la falta de oportunidades y condiciones), como expresión del emprendedorismo y de la profundización financiera; ahogamos a contribuyentes capaces de crear valor y empleo, para cumplir metas de recaudación; persistimos en el patrón extrativista para re-distribuir los excedentes anulando las posibilidades de crear empleo digno; y aspiramos a la diversificación productiva, pero fortalecemos el boliviano para abaratar las importaciones...

Es decir, las políticas públicas y el manejo de la economía acentúan la pobreza y la desigualdad. Metafóricamente, estamos metidos en un pozo del que queremos salir, pero seguimos cavando porque la teoría sostiene que “hay salida al otro lado”; puede ser muy cierto, pero el sentido común sugiere dejar de cavar, pensar, y aplicar alternativas diferentes y más efectivas.